

EL DERECHO A LA RETRIBUCIÓN DE LOS LAICOS AL SERVICIO DE LA IGLESIA

Jorge de Otaduy

1. CUESTIONES PRELIMINARES

La afirmación de la común condición que todos los fieles, en virtud de su incorporación a Cristo mediante el bautismo, ostentan en la Iglesia es considerada, justamente, como una de las principales aportaciones del último Concilio. Todos los miembros de la Iglesia, en efecto, "se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo por esta razón en la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo"¹.

La igualdad entre todos los fieles –nítidamente percibida hoy en la Iglesia, al menos en cuanto teórico principio– tiene un evidente carácter constitucional e incide en todos los ámbitos de la vida eclesial. Pero es indudable que donde ha encontrado un espacio más amplio para el despliegue de sus efectos es en la esfera de la vida y actividad de los laicos.

¹. Estos son los términos que, para precisar la noción de *christifideles* a la luz de la doctrina conciliar, emplea el c. 204 del CIC.

El reconocimiento de la igualdad fundamental de todos los fieles necesariamente conduce a una más clara comprensión de la corresponsabilidad de los laicos en la misión de la Iglesia en el mundo. El Concilio, en efecto, superando interpretaciones prevalentemente negativas, se abrió a una visión positiva subrayando las consecuencias de la plena pertenencia de los fieles laicos a la Iglesia y a su misterio y el carácter peculiar de su vocación, que tiene, de manera especial, la finalidad de "buscar el Reino de Dios tratando las realidades temporales y ordenándolas según Dios"².

La participación de los laicos en el triple oficio sacerdotal, profético y real de Cristo se produce *suo modo*, según su propia condición eclesial caracterizada, propiamente, por su índole secular. De aquí se sigue que "el campo propio de su actividad evangelizadora –como señaló Pablo VI– es el dilatado y complejo mundo de la política, de la realidad social; y también de otras realidades particularmente abiertas a la evangelización, como el amor, la familia, la educación de los niños y de los adolescentes, el trabajo profesional, el sufrimiento. Cuantos más laicos haya compenetrados con el espíritu evangélico, responsables de estas realidades y explícitamente compenetrados en ellas, competentes en su promoción y conscientes de tener que desarrollar toda su capacidad cristiana, a menudo ocultada y sofocada, tanto más se encontrarán estas realidades al servicio del Reino de Dios –y por tanto de la salvación en Jesucristo–, sin perder ni sacrificar nada de su coeficiente humano, sino manifestando una dimensión trascendente a menudo desconocida"³.

². *Lumen gentium*, n. 31.

³. Exhortación Apostólica *Evangelii nuntiandi*, n. 70, en AAS, 68 (1976), pág. 60.

Este luminoso texto del magisterio reciente ilustra, en perfecta sintonía con el Concilio, la trascendencia de la misión apostólica de los laicos a quienes corresponde de manera operativa producir el crecimiento del Reino de Dios en la historia y constituirse en el cauce a través del cual la Iglesia actúe como principio vital de la sociedad humana⁴.

Una vez esbozada, siquiera brevemente, la que debe considerarse como la *participación primaria* de los laicos en la misión salvífica de la Iglesia, debemos reflexionar acerca de otras formas de participación en su vida y misión, a cuyo servicio los fieles laicos contribuyen con sus diversos y complementarios carismas y funciones.

La Constitución dogmática *Lumen gentium* señaló, en efecto, que los laicos "pueden también ser llamados de diversos modos a una cooperación más inmediata con el apostolado de la jerar-

4. Entiéndase bien, sin embargo, que la actuación de los laicos en el interior de la Iglesia o en el mundo no son misiones separables. Como ha recordado recientemente T. RINCÓN PÉREZ, "ni siquiera cabe decir que sean adecuadamente distintas, atendida la profunda compenetración de la ciudad terrena y la ciudad eterna, y la íntima relación de los órdenes, espiritual y temporal, en el único propósito de Dios (cfr *Apostolicam actuositatem*, n.5) hasta el punto de que razón de ser de la Iglesia es 'actuar como fermento y alma de la sociedad, que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios'". *La participación de los fieles laicos en la función santificadora de la Iglesia*, en "Ius Canonicum", 58 (1989), pág. 629. También A. FERNÁNDEZ ha advertido el equívoco que encierra la división radical de Iglesia y mundo en orden a la diferenciación de funciones: "No es válido trazar una vertical entre las tareas intraeclesiales y la actividad en medio del mundo, sometiendo las primeras a la jerarquía y reservando a los laicos en totalidad la presencia cristiana en la vida social (...). La lectura teológica de la condición secular de los laicos no excluye su participación en las realidades propiamente eclesiales. Cabe un compromiso típicamente laical en la sociedad civil y en la comunidad eclesial". *Ministerios no ordenados y laicidad*, en "La misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo", Actas del VIII Simposio Internacional de Teología, Pamplona, 1987, pág. 393.

quía"⁵; que "algunos de entre ellos, al faltar los sagrados ministros o estar impedidos éstos en caso de persecución, los suplen en determinados oficios sagrados en la medida de sus facultades"⁶; y, más aún, que los laicos "son aptos para que la jerarquía les confíe el ejercicio de determinados cargos eclesiásticos, ordenados a un fin espiritual"⁷.

El Código de Derecho Canónico, como es bien sabido, recibe la doctrina conciliar y enumera una serie de funciones o tareas propias de los sagrados pastores que, sin embargo -por especiales y graves circunstancias, y, concretamente, por falta de presbíteros o diáconos- son momentáneamente ejercidas por fieles laicos, previo otorgamiento de facultad jurídica y mandato de la autoridad eclesiástica competente⁸.

El sentir de la Iglesia es que la vocación secular de los laicos no sufra menoscabo como consecuencia de su participación directa en tareas que son, en ocasiones, propiamente eclesiásticas. Se recuerda, en efecto, que "el ejercicio de estas tareas no hace del fiel laico un pastor (...). Sólo el sacramento del orden atribuye al ministerio ordenado una peculiar participación en el oficio de Cristo Cabeza y Pastor y en su sacerdocio eterno"⁹.

El magisterio no oculta sus reservas ante determinadas actitudes que pueden empañar, de alguna manera, el carácter secular de los fieles laicos dedicados a tareas eclesiásticas, como son, por ejemplo, "el uso indiscriminado del término 'ministerio', la confusión y tal vez igualación entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial, la escasa observancia de ciertas leyes y normas eclesiásticas, la interpretación arbitraria del concepto de

⁵. *Lumen gentium*, n. 33.

⁶. *Ibid.* n. 35.

⁷. *Ibid.* n. 33.

⁸. Cfr. cc. 230 § 3; 517 § 2; 776; 861 § 2; 910 § 2; 943; 1112.

⁹. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica *Christifideles laici*, n. 23.

'suplencia', la tendencia a la 'clericalización' de los fieles laicos y el riesgo de crear de hecho una estructura eclesial de servicio paralela a la fundada en el sacramento del orden"¹⁰.

El servicio de los laicos a la Iglesia-institución, siendo tan conveniente –e incluso, a veces, necesario–, no puede concebirse como una especie de coronación de su vocación cristiana.

Además de las mencionadas funciones de suplencia en materia estrictamente pastorales –litúrgicas, sacramentales o de predicción– encuadrables en el marco de los ministerios no ordenados, existen otras formas de servicio de los laicos a la Iglesia-institución. Son dos los textos conciliares que aluden directamente a este fenómeno. El primero –del número 22 del Decreto *Apostolicam actuositatem*– se refiere al especial honor que merecen "los seglares, solteros o casados, que se consagran para siempre o temporalmente con su pericia profesional al servicio de esas instituciones y de sus obras. Sirve de gozo a la Iglesia –continúa el Decreto– el que cada día aumenta el número de los seglares que prestan el propio ministerio a las asociaciones y obras de apostolado, o dentro de la nación, o en el ámbito internacional, o sobre todo en las comunidades de misiones y de iglesias nuevas". El segundo texto conciliar alusivo al servicio eclesial de los laicos se encuentra en el Decreto *Ad gentes*, n. 17: "Digna de alabanza es también esa legión tan benemérita de la obra de las Misiones entre los gentiles. Es decir, los catequistas, hombres y mujeres que, llenos de espíritu apostólico, prestan con grandes sacrificios una ayuda singular y enteramente necesaria para la propagación de la fe de la Iglesia".

En uno y otro caso se añade la recomendación de que perciban una remuneración justa de acuerdo con su estado de vida¹¹. Los

¹⁰. *Ibidem*.

¹¹. En *Apostolicam actuositatem*, n. 22, se lee: "Reciban a estos seglares los pastores de la Iglesia con gusto y gratitud, procuren satisfacer lo mejor posible las exigencias de la justicia y de la caridad, según su condición, sobre todo en cuanto al congruo sustento suyo y de sus familias, y ellos disfruten de

textos citados constituyen la fuente del vigente c. 231 del Código de Derecho Canónico¹², objeto de estudio en este trabajo, que coloca en el catálogo de los derechos de los fieles laicos el de percibir una adecuada retribución cuando se dedican de un modo permanente o temporal a un servicio especial de la Iglesia¹³.

Adviértase que en este estudio no se trata tanto de ilustrar cuáles sean las capacidades de acción que el ordenamiento canónico permite desarrollar a los fieles laicos en relación con los *munera Christi*¹⁴ sino, más bien, de precisar la naturaleza de los servicios especiales a que alude el c. 231 y las características de la relación jurídica que vincula a los prestadores de tales servicios con la Iglesia-institución. Se quiere dar respuesta a la pregunta sobre el estatuto jurídico de los laicos en cuanto colaboradores de la Iglesia.

la instrucción necesaria, del consuelo, y del aliento espiritual". Y en *Ad gentes*, n. 17: "Además hay que procurar a quienes se entregan por entero a esta obra una condición de vida decente y la seguridad social por medio de una justa remuneración".

¹². Así aparece expresamente indicado al pie del canon correspondiente aprobado en la sesión del *Coetus "De laicis"*, celebrada los días 28 de noviembre a 3 de diciembre de 1966. Vid. *Communicationes*, XVII (1985), pág. 196.

¹³. Cfr. c. 231 § 2. "Manteniéndose lo que prescribe el c. 230 § 1, tienen derecho (los laicos que de modo permanente o temporal se dedican a un servicio especial de la Iglesia) a una conveniente retribución que responda a su condición, y con la cual puedan proveer decentemente a sus propias necesidades y a las de su familia, de acuerdo también con las prescripciones del derecho civil; y tienen también derecho a que se provea debidamente a su previsión y seguridad social y a la llamada asistencia sanitaria".

¹⁴. Esa es la perspectiva que adopta el interesante trabajo de T. RINCÓN PÉREZ, ya citado, *La participación de los fieles laicos...* También mantienen ese enfoque los estudios de G. DALLA TORRE, *La collaborazione dei laici alle funzioni sacerdotali, profetica e regale dei ministri sacri*, en «Monitor ecclesiasticus», CIX (1984), págs. 140-165 y de G. FELICIANI, *I diritti fondamentali dei cristiani e l'esercizio dei 'munus docendi e regendi'*, en "Les droits fondamentaux du chrétien dans l'Eglise et dans la société", Fribourg Suisse-Freiburg i. Br.-Milano, 1981, págs. 221-240.

El derecho que enuncia el c. 231 tiene características del todo singulares si se compara con los restantes de la misma serie que el Código enumera. Así, por ejemplo, el título para su ejercicio no se adquiere por la simple circunstancia de ostentar la condición laical, sino por la prestación de unos peculiares servicios.

La mencionada singularidad, sin embargo, no conduce a que deba ser objeto de un tratamiento independiente de los restantes derechos de los fieles laicos. El c. 231 debe leerse e interpretarse en el conjunto de las disposiciones que delimitan las capacidades de acción de los laicos en la Iglesia, entre las cuales se cuentan las correspondientes a esos especiales servicios que generan un derecho de retribución económica.

La necesidad de individuar la naturaleza y características de esos servicios nos conduce al siguiente apartado de nuestro estudio.

2. TIPOLOGÍA DE LOS SERVICIOS DESEMPEÑADOS POR LOS LAICOS EN LA IGLESIA

Una consideración atenta de la realidad eclesial, desde la simple perspectiva sociológica, nos permite descubrir una considerable variedad de formas de presencia de los laicos en la Iglesia-institución. Lo que ahora aquí interesa es, simplemente, determinar algunos criterios¹⁵ que resulten útiles para ordenar de alguna manera esa abigarrada realidad social, y que faciliten la función calificadora del jurista.

El primero de los criterios que pueden señalarse es aquel que distingue según sea *la naturaleza de la prestación*. Esta puede ser

¹⁵. Téngase en cuenta que son criterios no excluyentes sino complementarios, que permiten contemplar las mismas realidades desde puntos de vista diferentes.

de contenido religioso o profano. Se consideran religiosas, a estos efectos, aquellas actividades que presentan una vinculación directa con la finalidad espiritual de la Iglesia. Habría que incluir entre ellas, por ejemplo, la cooperación de los laicos en obras apostólicas, principalmente como colaboradores de la jerarquía, la participación en los diferentes consejos eclesiales y, desde luego, el ejercicio de ministerios, encargos y oficios eclesiásticos. Este último supuesto, sobre el que trataremos más adelante con amplitud, presenta un relevante contenido jurídico en la medida en que conecte con la cuestión de la participación de los laicos en el ejercicio de la potestad sagrada.

Lo característico de los fieles laicos, sin embargo, es la dedicación a los *negotia saecularia*, y mediante el ejercicio de su específica actividad en el mundo, su profesión u oficio, pueden también servir de forma directa e inmediata a la Iglesia.

Otra perspectiva desde la que puede observarse el fenómeno del servicio eclesial de los fieles laicos permite distinguir entre los diversos cometidos *según den lugar o no a una vinculación con las estructuras organizativas de la Iglesia*.

Este planteamiento nos permite acceder, por un lado, al amplio mundo de los servicios amistosos, benévolos o altruistas, que acogen todas las formas de trabajo voluntario prestado exclusivamente *religionis causa*. Son tareas que guardan una relación directa con el despliegue de las exigencias de la vocación cristiana. Las concretas actividades a las que cabe aludir son tan variadas como, por ejemplo, la colaboración de los laicos en asociaciones religiosas o en servicios parroquiales, sean de carácter religioso (actos de culto o catequesis) o bien de naturaleza material (labores de mantenimiento o limpieza de instalaciones). Cabe también referirse a la colaboración de los fieles laicos en la prestación de obras de misericordia o a su participación en consejos eclesiales.

No es el caso de prolongar la enumeración sino de señalar lo que de común presentan este tipo de actividades: aunque tengan

todas ellas una dimensión jurídica –porque se encuentran sometidas a las reglas del derecho– no dan lugar a una vinculación de los fieles con la Iglesia- institución.

Muy diversa es la situación de quienes desempeñan el servicio a título profesional –es decir, como medio de vida–, en virtud de una relación jurídica *inter partes*. Entre las notas propias de esa relación se encuentran siempre dos: la permanencia y la retribución (aunque puedan aparecer otras, según sea el tipo de relación que se instaure). En efecto, la común calificación de estas tareas como profesionales no debe inducir a pensar que el régimen jurídico de las relaciones que originen sea uniforme puesto que las modalidades de servicio pueden ser muy diversas entre sí.

Encontramos, por una parte, aquellos supuestos en los que los laicos desempeñan oficios eclesiásticos, con la posibilidad, incluso, de que entrañen el ejercicio de la potestad de régimen. Es también posible que esos mismos fieles reciban mediante misión canónica o mandato de la autoridad encargos de carácter eclesial que no supongan ejercicio del poder de jurisdicción. Me refiero, principalmente, a tareas que guarden alguna relación con la administración de bienes eclesiásticos. La organización económica de la Iglesia, en todos los niveles, tiende a configurarse cada vez más de acuerdo con criterios técnicos que reclaman de los administradores no solamente la práctica de las virtudes morales sino los conocimientos que poseen aquellos cuya formación está dirigida hacia las finanzas y la economía, que, ordinariamente, serán laicos. "Pretender que los clérigos, en número suficiente, adquieran esta formación –como se ha puesto muy razonablemente de relieve–, supone generalmente una pérdida cuantiosa de energías que necesitan íntegramente para el desarrollo de su función pastoral"¹⁶.

¹⁶. A. DEL PORTILLO, *Fieles y laicos en la Iglesia*, 2º edic., Pamplona, 1981, pág. 208.

El Código de Derecho Canónico avanza resueltamente en esta dirección cuando contempla a los laicos como posibles administradores de los bienes eclesiásticos, sin distinción alguna en relación con los clérigos¹⁷, o, más concretamente, como miembros del consejo de asuntos económicos¹⁸ o como titulares del oficio de ecónomo de la diócesis¹⁹.

Otra forma de servicio laical profesionalizado es aquel que puede encuadrarse bajo la rúbrica de la dedicación exclusiva al apostolado. Cabe individuar aquí la actividad de los dirigentes de asociaciones religiosas públicas o la de quienes colaboran en tareas misionales mediante el ejercicio de su trabajo profesional, como puede ser, por ejemplo, el caso de maestros, médicos y enfermeras.

Existe una tercera modalidad de servicio permanente en favor de la Iglesia, que responde a motivaciones y presenta características diversas de las anteriores. Me refiero a la prestación de una actividad puramente secular en el ámbito de las estructuras administrativas de la Iglesia, mediante contrato (sea laboral o civil) establecido en el marco del derecho del Estado. Esta fórmula jurídica puede amparar el trabajo de gran parte de los fieles laicos que colaboran con la Iglesia.

Un último criterio de clasificación de lo que venimos denominando los servicios de los laicos en la Iglesia es el que deriva

¹⁷. Vid. c. 1282: "Todos aquellos, *clérigos o laicos*, que participan por un título legítimo en la administración de los bienes eclesiásticos..." (el subrayado es mío).

¹⁸. Vid. c. 492 § 1: "En cada diócesis ha de constituirse un consejo de asuntos económicos, presidido por el Obispo diocesano o su delegado, que conste al menos de *tres fieles* designados por el Obispo, que sean expertos en materia económica y en derecho civil, y de probada integridad". (el subrayado es mío).

¹⁹. Vid. c. 494 § 1: "En cada diócesis, el Obispo, oído el colegio de consultores y el consejo de asuntos económicos, debe nombrar un ecónomo, que sea verdaderamente experto en materia económica y de conocida honradez".

de la consideración del *ámbito en el que tales actividades despliegan sus efectos*. Si contemplamos la realidad desde este punto de observación, habremos de concluir que uno es el contorno intraeclesial y otro el propio del derecho del Estado. En el primero se localizan todas las formas de trabajo voluntario, benévolo o amistoso en favor de la Iglesia, que no dan lugar a relaciones profesionales. También parece encajar en esa esfera toda la gama de servicios desempeñados en virtud de nombramiento eclesiástico o encargo de la jerarquía y de los que se siguen exclusivamente relaciones canónicas. Quienes trabajan, en cambio, a título laboral o mediante contrato de servicios encuentran como marco jurídico de referencia el ordenamiento estatal.

Si algo resulta claro en este panorama, someramente descrito y de suyo bastante complejo, es que no todos los colaboradores de la Iglesia –tomando el término en su máxima amplitud– son titulares del derecho a la retribución por parte de la organización eclesial. Ahora bien, las precisiones ulteriores requieren abandonar el método sociológico para recurrir al enfoque jurídico.

3. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS RELACIONES DE SERVICIO EN LA IGLESIA

La determinación del derecho –del *iustum*, la cosa justa– exige, ordinariamente, el manejo de la técnica de la distinción. La tarea que a continuación se acomete consistirá, sencillamente, en distinguir de forma razonable entre una diversidad de situaciones que producen reflejos jurídicos diferentes.

El c. 231 del Código configura como un auténtico derecho del fiel laico la retribución por parte de la Iglesia cuando presta algún servicio de carácter especial. La importante precisión de la naturaleza de los servicios advierte claramente que son solamente

esos –los especiales– y no otros, los que generan el mencionado derecho.

Téngase además en cuenta que el derecho objeto de nuestra atención es aquel ejercitable por una persona en cuanto *fiel* de la Iglesia y, por lo tanto, ante la Iglesia como *entidad canónica* –si se permite la expresión– es decir, como institución soberana dotada de propio ordenamiento jurídico. La observación es oportuna –a mi juicio– para mantener una correcta distinción de ámbitos jurídicos –eclesial, por un lado; estatal, por otro– y, con ello, distinguir el derecho *canónico* a la retribución del fiel de su homónimo *civil*, que, indudablemente, es ejercitable ante la autoridad eclesiástica por muchos de sus colaboradores cuando el servicio no se presta a la Iglesia *entidad canónica* sino, más bien, a la *persona jurídica civil* sujeta en su actividad al ordenamiento del Estado.

Esta segunda modalidad de servicio se encuentra implícitamente reconocida en el ordenamiento canónico cuando se alude, en el c.1286, a la contratación de los empleados de la Iglesia y es indudable que genera un derecho a la retribución de los servicios; pero tal derecho, propiamente –y es importante notarlo–, no lo es del *fiel*, como tal fiel, sino un derecho *humano* y un derecho del *ciudadano*.

Planteados los términos de la cuestión es el momento de precisar, en lo que nos sea posible, la naturaleza de los *servicios especiales* y de aquellos otros –si fueran realmente distintos– que dan lugar a otras formas de empleo.

a. *La naturaleza de los servicios especiales*

Las actividades que el c. 231 denomina servicios especiales han de presentar, indudablemente, una vinculación directa con la finalidad espiritual de la Iglesia. Así resulta de los textos conciliares que inspiraron directamente la redacción del canon y que,

como ya se ha dicho, contemplan la acción misionera y catequética desarrollada por laicos. No hay inconveniente, a mi juicio, en atribuir idéntica naturaleza especial –a efectos del c. 231– al trabajo que los laicos pueden desempeñar en cuanto titulares de oficios o en virtud de encargo, mandato o misión conferidos por la jerarquía.

Todos estos supuestos tienen en común que son, en alguna medida, fruto de una motivación religiosa. En unos casos, la prestación del servicio cabe ser concebida como simple derivación de las particulares exigencias de la vocación cristiana, mientras que en otros puede incluso preceder alguna especie de consagración personal.

Los servicios especiales del c. 231 deben presentar, además, tanto por su contenido objetivo como por la intención de quien los presta, carácter profesional. Si convenimos en esta afirmación, quedan excluidas del ámbito específico de la norma aquellas tareas que no resulten idóneas para dar lugar a una relación permanente, como pueden ser las que lleven a cabo consultores o miembros de consejos eclesiales. Permanece igualmente al margen de lo previsto en este canon el trabajo voluntario, mientras el prestador del servicio renuncie a los efectos que, con carácter general, reconocen las normas legales. Por mención expresa de la ley²⁰ hay que eliminar también de la esfera propia del c. 231 § 2 a los laicos llamados al ejercicio de los ministerios no ordenados y a los que ejecutan funciones de suplencia como las mencionadas en el c. 230 § 3²¹.

²⁰. Vid. c. 230 § 1: «Los varones laicos que tengan la edad y condiciones determinadas por decreto de la Conferencia Episcopal, pueden ser llamados para el ministerio estable de lector y acólito, mediante el rito litúrgico prescrito; sin embargo, la colación de esos ministerios *no les da derecho a ser sustentados o remunerados por la Iglesia*». (el subrayado es mío).

²¹. Ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la sagrada comunión.

La índole profesional de los servicios especiales del c. 231 viene confirmada a partir de los textos conciliares que son fuente de la norma. El primero –del Decreto *Ad gentes*, n. 17– establece que ha de ofrecerse una justa remuneración a los catequistas que se entreguen *por entero* a esta obra; el segundo –del Decreto *Apostolicam actuositatem*, n. 22– impone la observancia de las normas de la caridad y de la justicia por parte de la Iglesia en favor de los seglares que se consagran *para siempre* o *temporalmente* con su *pericia profesional* al servicio de instituciones u obras eclesiales.

Más allá de la cuestión sustancial que plantea el c. 231 –la configuración del derecho– hay que interrogarse acerca del alcance del mandato relativo a la observancia, en materia retributiva, de las prescripciones del derecho civil ¿Constituye esa afirmación un caso particular de lo genéricamente dispuesto en el c. 1290 acerca de la observancia del derecho civil en materia de contratos?; o de otro modo, ¿nos encontramos ante un caso de canonización de la ley civil, que resultaría entonces aplicable al régimen canónico en materia de personal?

La interpretación literal de la norma no permite extraer esta conclusión. El ajuste a lo prescrito por las normas estatales parece referirse únicamente a la cuantía de la retribución. Según esto, el montante económico percibido por los colaboradores *especiales* de la Iglesia en ningún caso podría resultar inferior al salario mínimo reglamentariamente fijado por la autoridad del Estado.

Es posible, con todo, que estas relaciones canónicas de servicio se formalicen civilmente. Corresponde en definitiva a la autoridad eclesiástica valorar si la caracterización de tales relaciones conforme a las normas propias del Estado entrañaría el riesgo de desnaturalizar su específico contenido canónico.

b. *La naturaleza de los servicios contratados*

La formalización civil de las relaciones especiales de servicio –si se llevara a efecto– daría lugar a la equiparación, en la práctica, entre el régimen de los prestadores de servicios especiales y de los empleados de la Iglesia. Estos últimos son quienes desempeñan tareas no directamente conectadas con la finalidad espiritual de la Iglesia y son contratados, en todo caso, en el ámbito del derecho del Estado. Como advertimos en su momento, no son titulares de derechos propios de los fieles sino, más bien, de aquellos que el ordenamiento estatal reconoce a los prestadores de servicios profesionales.

Esta conclusión no ofrece duda a partir de lo dispuesto por el c. 1286, según el cual los administradores de bienes han de observar cuidadosamente las leyes civiles en las relaciones de empleo y, en todo caso, deben pagar un salario justo a quienes trabajan en virtud de un contrato.

Conviene dejar constancia, sin embargo, de que la traducción oficial española del canon citado resulta sumamente desafortunada al establecer la equivalencia entre la amplia figura de la *locatio operarum* y la específica institución del contrato de trabajo, propia del derecho laboral²². Hay que suponer que esa traducción carece de intencionalidad técnico-jurídica y que pueden establecerse también en el seno de las estructuras

²². Dice, en efecto, la traducción española: "Los administradores de bienes: 1º en los *contratos de trabajo* y conforme a los principios que enseña la Iglesia, han de observar cuidadosamente las leyes civiles en materia laboral y social; 2º deben pagar un salario justo y honesto al personal contratado, de manera que éste pueda satisfacer convenientemente las necesidades personales y de los suyos". Es interesante advertir que las versiones del c. 1286 en las lenguas de las naciones más cercanas a nuestra propia tradición jurídica son más matizadas que la versión española, omitiendo expresa referencia al *contrato laboral*. Así, la traducción francesa habla de *l'engagement du personnel employé*; la italiana, de la observancia de las leyes civiles *nell'affidare i lavori*.

eclesiásticas relaciones no laborales, de acuerdo, en todo caso, con las prescripciones del derecho del Estado.

c. La contratación laboral o civil de los colaboradores de la Iglesia

La posibilidad apuntada de formalizar civilmente también la relación jurídica de los prestadores de servicios especiales es congruente con la condición secular propia de los laicos, cuya vida no se regula canónicamente sino por las leyes y usos de la sociedad civil. Nada impide que los laicos a quienes se confiere un determinado oficio o encargo eclesiástico suscriban contrato en la esfera del ordenamiento estatal. En esta situación podrían encontrarse aquellos técnicos nombrados, por ejemplo, asesores de asuntos económicos o que ostenten, incluso, el cargo de administrador de la diócesis.

Situados ya en el ámbito del derecho del Estado habría que determinar aún el tipo de contrato que mejor se ajuste, de entre los previstos para la prestación de servicios profesionales, a la actividad específicamente desarrollada. Si ésta respondiera a las notas que el derecho del Estado establece para la calificación laboral de una relación de servicio, como consecuencia de la efectiva integración del trabajador en el ámbito de dirección del dador de trabajo, podría celebrarse un contrato laboral. Si no fuera así, por tratarse, por ejemplo, de una dedicación parcial, o desempeñarse la tarea profesional fuera del *centro de trabajo*, nos encontraríamos ante una situación que tendría mejor encaje en un contrato civil de arrendamiento de servicios. Esa puede ser la solución más ajustada para quienes desarrollan en favor de la Iglesia tareas profesionales de administración de bienes, de asesoramiento jurídico o financiero, de contabilidad, etc.

La formalización del contrato en el marco del derecho estatal no elimina toda posible relevancia del régimen canónico relativo

al personal prestador de servicios especiales en la Iglesia. En este orden de cosas tiene especial importancia la disciplina contenida en los cánones 145 a 196 del Código –en la medida en que resulte aplicable a los laicos– sobre provisión y pérdida de oficios en la Iglesia.

En la hipótesis de formalización de un contrato civil de arrendamiento de servicios, el conflicto con el régimen canónico es difícilmente pensable si se considera la flexibilidad de esa figura y la amplia libertad reconocida a las partes para proceder a su rescisión. Cosa distinta sucede ante el contrato de trabajo, institución de perfiles rígidamente marcados por la ley y cuya extinción es siempre de naturaleza causal. Ya advertimos que el contrato laboral es admisible también para quienes desempeñan oficios eclesiásticos en régimen de dependencia e integración en la estructura eclesiástica. Sin embargo, el respeto a la disciplina canónica hace necesario admitir en esos casos algunas salvedades al régimen laboral, que se siguen del carácter que el encargo, mandato o misión canónica tienen como presupuesto del contrato. En efecto, la atribución del mandato de la jerarquía con anterioridad al establecimiento del contrato habilitaría para desempeñar el oficio, y su retirada habría de considerarse, en lógica consecuencia, causa de extinción del contrato.

d. *Régimen especial de los laicos titulares de la potestad de régimen*

Un supuesto distinto a los ya considerados sería aquel en el que el desempeño de un oficio eclesiástico, por parte de fieles laicos, supusiera el ejercicio de la potestad eclesiástica de régimen. La raíz diferencial de esta situación no se encuentra simplemente en que el resultado del trabajo –por decirlo así– permanezca *in ecclesia*, puesto que algo muy semejante podría suceder al ejercitar otros oficios que no impliquen el uso de la

potestad. Lo verdaderamente peculiar reside en que el desarrollo de esa actividad se coloca en el ámbito de la soberanía de la Iglesia. Y la Iglesia no puede aceptar condicionamientos por parte de ordenamientos jurídicos extraños en todo aquello que rodea el ámbito de ejercicio de la *potestas regiminis*. Cierta limitación de la independencia eclesiástica en el ejercicio de su legítima potestad provendría, precisamente, de la formalización civil de una relación que debe permanecer exclusivamente canónica. Cuando el ejercicio de la potestad eclesiástica entra en juego, el régimen de dependencia del personal en la Iglesia prescinde por completo del derecho del Estado, tanto de normas laborales como civiles.

En realidad, a los laicos que ejercitan la *potestas regiminis* se aplica analógicamente, y sólo a los efectos del trabajo que desarrollan, las normas del estatuto personal de los clérigos. Así, por ejemplo, además de quedar excluida la relación laboral, tendrían vigencia –también para esos laicos– las normas canónicas sobre prohibición de promover o formar parte de determinadas asociaciones de fisonomía sindical, que supondría introducir técnicas organizativas seculares –que no sintonizan con el ser de la Iglesia– en la esfera de las relaciones eclesiásticas.

Mientras el curso de la relación resulte pacífico no ha de suscitarse, como es obvio, ninguna duda acerca de su naturaleza. El problema se presentaría, como es también evidente, cuando, en una situación de conflicto, se produjera el recurso a la jurisdicción estatal. Hemos afirmado que, si de la naturaleza del cargo deriva el ejercicio de la potestad de régimen, la relación habrá de considerarse exclusivamente canónica, de lo que se seguiría la declaración de incompetencia jurisdiccional del juez del Estado. Ahora bien, ¿a quién corresponde determinar si se produce de hecho el ejercicio de la potestad de régimen? Indudablemente, a la Iglesia. Hará falta, si la hipótesis aquí

apuntada llegara a plantearse, que el buen sentido de los jueces les lleve a entenderlo de este modo.

4. CONCLUSIONES

1. La función primaria que corresponde a los fieles laicos es contribuir al crecimiento del Reino de Dios en la historia y constituirse, de este modo, en el cauce a través del cual la Iglesia actúe como principio vital de la sociedad humana.

2. El ordenamiento canónico vigente, sin embargo, de acuerdo con la doctrina del Concilio Vaticano II, reconoce la capacidad de los fieles laicos para el ejercicio de determinadas funciones de suplencia en oficios sagrados, en la medida de sus facultades, y también para desempeñar ciertos cargos eclesiásticos, ordenados a un fin espiritual.

3. Además de la participación de los fieles laicos en funciones encuadrables en el marco de los ministerios no ordenados, existen otras formas de servicio, permanente o temporal, de los laicos a la Iglesia-institución. El c. 231 califica estos servicios como de *naturaleza especial*, habiendo de entenderse por tales aquellos que presentan una vinculación inmediata con la finalidad espiritual de la Iglesia (actividades misioneras, catequéticas o desempeño de oficios o encargos eclesiales).

4. Cuando estos servicios especiales se prestan con carácter profesional generan el derecho a una conveniente retribución económica. Se trata de un derecho específico de los laicos, reconocido y ejercitable en el ámbito del ordenamiento canónico. Las normas del derecho estatal -a las que alude el c. 231- deben tomarse en consideración a efectos, exclusivamente, de fijar la cuantía de la retribución.

5. Aquellos otros colaboradores de la Iglesia, cuya prestación profesional no presenta una vinculación inmediata con el fin

espiritual de la Iglesia, se rigen, en conformidad con lo dispuesto en el c. 1286 del Código, por las normas del ordenamiento del Estado relativas a la contratación de servicios profesionales. El derecho a la retribución, en este caso, es reconocido y ejercitado en el ámbito del derecho estatal. Se trata de un derecho del ciudadano y no del fiel.

6. No hay inconveniente en que los laicos prestadores de servicios especiales formalicen la relación canónica en términos civiles, siempre que ello no dé lugar a una pérdida de sentido de su dedicación eclesial. Tal medida es congruente con la condición secular propia de estos fieles, cuya vida no se regula, en principio, canónicamente sino por las leyes y usos de la sociedad civil.

7. Entre los diversos regímenes que establece el derecho del Estado para formalizar las relaciones de servicio profesionales, habrá que escoger en cada caso el que resulte más adecuado, conforme a la naturaleza del servicio prestado por los colaboradores de la Iglesia. En unos casos convendrá el recurso al contrato civil de arrendamiento de servicios y en otros al contrato de trabajo. En el segundo caso —especialmente si nos referimos a los prestadores de servicios especiales—, el respeto a la disciplina canónica obliga a admitir algunas salvedades al régimen laboral, que se siguen del carácter que, como presupuesto del contrato, tienen el encargo, mandato o misión canónica. En efecto, la atribución del mandato de la jerarquía con anterioridad al establecimiento del contrato habilitaría para el ejercicio de la actividad y su retirada habría de estimarse causa de extinción del contrato.

8. Los laicos que ejercitan la potestad eclesiástica de régimen no pueden en ningún caso formalizar su relación canónica según la normas estatales. El ejercicio de la *sacra potestas* corresponde a la soberanía de la Iglesia, sin que puedan aceptarse condicionamientos, ni siquiera indirectos, por parte de ajenos sistemas jurídicos.

